

Conozca la dura radiografía del delito en una investigación que hizo EL TIEMPO en cinco ciudades.

Dueños de droguerías ubicadas en el sur de Bogotá están siendo llamados por un **hombre que se identifica como miembro de la compañía 'Uribe Rondón', de las Farc**, quien les pide cien mil pesos al mes a cambio de que sus locales no sean dinamitados.

En Medellín, los habitantes de la comuna ocho tienen que pagar si quieren cruzar el sector de Tres Esquinas o entrar a la zona camiones con arroz, huevos, frituras y arepas. **Y en Meta, Caquetá, Casanare, Huila y Antioquia, las Farc y las bandas criminales están adelantando censos de petroleras**, cabezas de ganado, fincas, maquinaria y minas de oro para actualizar las tarifas de 'vacunas' del 2013.

En los últimos cuatro años, los casos de extorsión denunciados han crecido un 229 por ciento, pasando de 830 a 2.316. Sin embargo, los no denunciados podrían superar fácilmente los 10.000 si se tiene en cuenta que la propia Policía admite que solo se judicializa una de cada cinco extorsiones.

El dato parece encajar con el arrojado por la Encuesta Nacional de Victimización de 2012, según la cual 125.000 colombianos han pagado por una extorsión o han sido víctimas de intentos de cobro. **Medellín, donde el tema se está saliendo de madre, encabeza el escalafón de ciudades afectadas**, según el comandante del Gaula de la Policía, general Humberto Guatibonza. Le siguen Bogotá, Cali, Barranquilla y Santa Marta.

Esta batería de cifras, y los videos e información obtenida por los reporteros **que EL TIEMPO envió a cinco de las regiones más afectadas**, permiten concluir que la extorsión es el nuevo azote de Colombia.

No es gratuito que este haya sido el tema central de la reciente cumbre de comandantes de los Gaula. De hecho, **el alto consejero para la Convivencia y la Seguridad, Francisco Lloreda, admite que hay un aumento exponencial de casos**. Aunque advierte que los cobros no cubren la totalidad de las ciudades afectadas y que se están tomando medidas de fondo para frenar esta modalidad delictiva.

Pero gremios que hacen presencia por fuera del mapa urbano del país, como Fedegán, Fenalco, la Asociación de Petroleros y Asotrans, le suman al listado oficial regiones completas: Sucre, los dos Santanderes, Bolívar, Putumayo, Cauca, Caquetá y Meta. «En estos dos últimos departamentos hay ganaderos que no han podido volver a sus fincas», dice José Félix Lafaurie, cabeza de Fedegán.

En el 2012, el transporte intermunicipal de pasajeros registró 112 incidentes que incluyen quema de buses, prohibiciones para transitar y amedrentamiento a conductores por el no pago de 'vacunas'. Y la Asociación Colombiana del Petróleo admite un aumento de amenazas extorsivas en Casanare, Meta y Huila.

Otra modalidad que crece es la ciberextorsión. Hay bandas dedicadas a cazar datos en las redes sociales para exigir dinero a cambio de no divulgarlos masivamente.

Según la Policía, hay casos de extorsión en 29 de los 32 departamentos y ya se están infiltrando agentes para desarticular las bandas. Además, se están creando Gaulas exclusivamente para combatirlos.

Cifras y 'zares'

Pero el rastreo se dificulta porque algunas víctimas ya han pagado y esto es considerado un delito: financiación de grupos al margen de la ley.

El subregistro en las denuncias y la judicialización de las víctimas también impide cuantificar los réditos de esta industria ilegal. **Pero analistas asesores de las Fuerzas Militares calculan que supera los dos billones de pesos**, monto similar al que mueve el microtráfico en Medellín.

En lo que sí coinciden Fiscalía, Policía y Ejército es en señalar a los 'zares' de la extorsión: un par de guerrilleros de las Farc, la 'oficina de Envigado' y los líderes de las bandas 'los Rastrojos' y 'los Urabeños'. **Además, alias 'Junior', heredero de una polémica casta política de la Costa que usa granadas y sicarios para obligar a los negocios a pagar.**

Debajo de ellos hay decenas de grupos de delincuencia organizada, que rondan comercios y barrios escudándose en nombres de bandas para intimidar a sus víctimas y lograr un pago rápido y sustancioso. Las tarifas van desde mil pesos, hasta cien millones.

¿Qué se está haciendo?

Para el exjefe de inteligencia de la Policía, general (r.) Jairo Delgado, y para Lafaurie hay una explicación clara de por qué las Farc ocupan el segundo lugar en la tabla de victimarios, después de la delincuencia común.

Renunciaron al secuestro, de cara a los diálogos de paz, pero tienen que seguir obteniendo recursos, y la extorsión es igual de lucrativa. **También hay una explicación para que las bandas criminales -o neoparamilitares- ocupen el tercer lugar.**

Además de narcos, la mayoría trabaja en los linderos de la delincuencia común y la mejor prueba es que este delito se registra con mayor énfasis en zonas donde más 'paras' se desmovilizaron. Antioquia y Córdoba son la mejor muestra.

Paradójicamente, EL TIEMPO encontró entre las víctimas a desmovilizados de las Farc, y la Defensoría del Pueblo tiene casos documentados de familias estrato cero extorsionadas en el Valle.

De ahí la urgencia de que las medidas anunciadas por el Gobierno -que pide a la ciudadanía denunciar- empiecen a ser implementadas ya. La Policía responde que la mejor prueba de que están en marcha es la captura de 'Carlos Pesebre', uno de los 'zares' de la extorsión, hace apenas 24 horas.

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12702998.html